



Consejo Consultivo de Canarias

## DICTAMEN 117/2006

(Sección 1ª)

La Laguna, a 4 de mayo de 2006.

Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona en relación con la *Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por J.M.G.G., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público viario: Conservación y mantenimiento: firme en mal estado. No se estima la reclamación: inadmisión (EXP. 115/2006 ID)\*.*

## FUNDAMENTOS

### I

1. El presente Dictamen tiene por objeto el análisis de la Propuesta de Resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial derivado del funcionamiento del servicio público viario, supuestamente de titularidad municipal, tramitada por el Ayuntamiento de Arona, cuyas funciones de mantenimiento y conservación le corresponden en virtud de los arts. 5.1 y 10.3 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias, los arts. 11 y 14 del Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de Canarias, y el art. 25.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

2. Es preceptiva la solicitud de Dictamen, en virtud de lo dispuesto en el art. 11.1.D.e) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, solicitud remitida por el Alcalde del Ayuntamiento actuante, conforme con el art. 12.3 de la citada Ley.

---

\* **PONENTE:** Sr. Bosch Benítez.

3. El procedimiento se inicia por escrito de reclamación de indemnización por daños presentado el 24 de noviembre de 2005 por J.M.G.G., en ejercicio del derecho indemnizatorio regulado, con fundamento en lo dispuesto en el art. 106.2 de la Constitución, en los arts. 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), y en el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial (RPAPRP), aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, en cumplimiento de lo previsto en el art. 142.3 de la citada Ley.

4. El hecho lesivo se produjo, según el escrito de reclamación, cuando el 24 de noviembre de 2005 el reclamante circulaba por la carretera TF-28, en dirección al núcleo urbano de La Camella, con el vehículo de su propiedad, y al llegar a la zona conocida como Cruz del Guanche, debido al mal estado del pavimento de la parte derecha del carril de marcha, el referido vehículo sufrió desperfectos por importe de 80 euros (según factura original que consta en el expediente).

## II

El interesado en las actuaciones es J.M.G.G., estando legitimado para reclamar al ser el titular del bien que se alega dañado. La legitimación pasiva para la tramitación y decisión del expediente, sin embargo, no corresponde al Ayuntamiento de Arona, sino al Cabildo de Tenerife, puesto que la carretera en que tuvo lugar el accidente es de su titularidad.

Se cumplen los requisitos exigidos para la presentación y admisión de la reclamación previstos en los arts. 142.5 y 139.2 LRJAP-PAC, pues aquella se formula dentro del año posterior a la producción del hecho lesivo y el daño es efectivo, económicamente evaluable y personalmente individualizado. E, igualmente, se cumple el plazo de seis meses que para la finalización del procedimiento se prevé en el art. 13 RPAPRP.

## III

La Propuesta de Resolución de este procedimiento, inadmitiendo la reclamación del interesado, es conforme a Derecho. Y ello porque, según el informe del Servicio, la carretera en la que se produjo el accidente es de titularidad del Cabildo de

Tenerife y no del Ayuntamiento de Arona, ante el que se reclama, por lo que éste no es el competente para tramitar y resolver el expediente, sino que lo es el Cabildo.

Ahora bien, debe dársele conocimiento al interesado de esta Resolución a fin de que presente su reclamación ante el Cabildo de Tenerife.

## C O N C L U S I Ó N

La Propuesta de Resolución examinada es conforme a Derecho, al ser el Cabildo Insular de Tenerife, y no el Ayuntamiento de Arona, el titular de la carretera en que se produjo el siniestro, debiendo notificarse esta Resolución al interesado a los efectos indicados.